

C.A SANTIAGO

Santiago, ocho de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

En causa RUC N° 1.900.613.425-7, RIT N° 21-2022, comparece don CESAR BUSTAMANTE MONTERO, Defensor Penal Público, por el condenado EDGAR DAVID PAREDES HINCAPIE, e interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva del 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, de fecha 16 de junio del presente año, mediante la cual se condena a su representado, a padecer la pena de PRESIDIO PERPETUO, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal, por la responsabilidad penal que le cupo en calidad de autor directo, conforme al artículo 15 N° 1 del Código Penal, en el delito de Robo con Homicidio en la persona de Jorge Eduardo del Carmen Irarrázaval Alarcón, ilícito que describe y sanciona el artículo 433 N° 1 en relación con el artículo 432 del mismo estatuto punitivo, en grado de ejecución Consumado, el cual se perpetró el día 07 de Junio de 2019, en la Comuna de Lo Barnechea de esta ciudad.

Se exime al sentenciado del pago de las costas de la causa, conforme los fundamentos dados a conocer en el último basamento del fallo y atendido lo extenso de la pena impuesta y lo razonado en la motivación décimo séptima del laudo, no procede la aplicación de las penas sustitutivas que contempla la Ley N° 18.216 en su actual redacción, por no reunirse los presupuestos legales para ello. De este modo, deberá entrar a purgarla de manera real y efectiva, contándosele en todo caso aquella desde el día 09 de junio de 2021, fecha en que se hizo efectiva la medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra en razón del juicio oral y desde la cual ha



permanecido ininterrumpidamente privado de libertad, contabilizándosele en todo caso como abonos, la cantidad de trescientos setenta y tres (373) días.

El arbitrio intentado se fundamenta en la causal establecida en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, por cuanto, en el pronunciamiento de la sentencia, se ha hecho una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto da por configurado el delito de robo con homicidio sin cumplir con todos los requisitos que exige el tipo penal, causando un agravio a su mandante al ser condenado a la pena de presidio perpetuo.

Con fecha 19 de julio del año en curso, se celebró la audiencia de rigor, a la que asistieron y alegaron por el recurso, el abogado don Franco Lobiano Barría, por 15 minutos, y contra el recurso, la letrada doña María Cristina Bernedo Kunz, en representación del Ministerio Público y los abogados querellantes Gonzalo De La Cerda Otto y Sebastián Cristóbal Segovia, por 15 minutos cada uno, fijándose la audiencia de lectura de la sentencia para hoy.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como fundamento de la causal de invalidación invocada, se señala que se ha realizado por parte de los sentenciadores una errónea aplicación del derecho, específicamente de los artículos 432 y 433 n°1, todos del Código Punitivo, este último que contempla la figura del robo con homicidio, toda vez que se ha aplicado dicho precepto a una hipótesis fáctica que ha dado por acreditada el tribunal, en la que no se dan todos los requisitos exigidos por la norma. Lo anterior, toda vez que el tipo penal no es un delito calificado por el resultado, sino que es un delito complejo que exige que el homicidio sea cometido con motivo u ocasión del robo, de manera que debe haber un vínculo entre la acción del homicidio y la acción de sustracción de especies para que sea considerada como una única acción, por cuanto la figura típica no está construida sobre un robo más un homicidio, sino sobre una apropiación violenta, donde el medio violento es el homicidio.



Indica que el tribunal señala que en este caso particular el homicidio se cometió “con ocasión” de la apropiación de especies, pero a su juicio queda de manifiesto que dado el núcleo fáctico acreditado por el Tribunal, donde la víctima es la que invita a don Paredes Hincapié a su domicilio, comparten largas horas, incluso sexualmente, para luego iniciar el acusado la acción típica , sólo con un dolo homicida y luego de concretarlo nace el dolo de apropiación de especies, siendo un acto posterior e independiente al dolo homicida, de manera que el tribunal erróneamente da por configurada la conexión ideológica para ambas acciones, al considerar el homicidio como cometido con ocasión del robo. Respecto a los requisitos que deben estar presentes en el delito de Robo con homicidio es la apropiación de especies y un homicidio, que ambas acciones estén vinculadas jurídicamente, además de estar obviamente todos los requisitos generales contra la propiedad por apoderamiento, como lo es la apropiación de una especie mueble ajena y con ánimo de lucro, de estos requisitos, el que erróneamente el Tribunal aplica, es la conexión ideológica entre la sustracción de especies y el homicidio.

Agrega que los sentenciadores aplican de manera errónea la norma del artículo 432 del Código Penal, que distingue la diferencia entre un hurto y un robo, señalando el artículo que debe ser una apropiación de especie ajena sin la voluntad de su dueño, con ánimo de lucro y con ausencia de intimidación, violencia o fuera, por lo que el tribunal agrega un requisito no contemplado en la ley para descartar la acción como un homicidio y un hurto, señalando tácitamente que la apropiación de especies debe ser rápida para que sea considerada un hurto.

Explica que el delito complejo tiene esta denominación, dado que deben estar presentes dos hechos delictivos vinculados jurídicamente, de modo que es insuficiente que se cause una muerte durante la apropiación de especies, dado que no es una figura calificada por el resultado. En efecto, alude que la expresión “con motivo u ocasión del robo se cometiere además,



homicidio” es la que debe analizarse para entender la errónea aplicación de los sentenciadores.

Adiciona que si bien el tribunal no utiliza esta expresión, si es bueno saber en qué caso se aplica, y para esto, el profesor Garrido Montt señala que esta expresión debemos entenderla: “como una relación de medio a fin entre la muerte que se provoca y la apropiación que persigue el sujeto activo; subjetivamente el autor ha de considerar la privación de la vida de la víctima, como una forma de facilitar o llevar a efecto el apoderamiento de la cosa mueble....en lo temporal, y comprender a muertes llevadas a cabo con la finalidad de robar, pero realizadas con antelación a la acción misma de apoderamiento...”. Al respecto, esta interpretación nos da luces claras de que la expresión “con motivo del robo” se refiere a una planificación previa del autor, en razón a que el homicidio es un paso más en la acción que tiene por finalidad última la de robar, situación que claramente no se da en este caso particular, dado que el núcleo fáctico acreditado señal que fue la víctima es quien invita al acusado a su domicilio, de manera que planificación previa por parte de Paredes Hincapie no hubo, por cuanto quedó acreditado en el juicio que tanto imputado y víctima no se conocían de antes.

Sobre la expresión: “Con Ocasión del robo” y que en concepto del recurrente fue utilizada erróneamente por el tribunal, el profesor Garrido Montt señala que: “debe entenderse como los homicidios ejecutados no para concretar el robo, sino mientras se realizaba o inmediatamente de cumplida la apropiación y, en este último caso, siempre que sea para asegurar la impunidad del hecho.

Expresa que bajo esta interpretación, queda de manifiesto el error cometido por el tribunal por, cuanto en el núcleo fáctico acreditado se señala que luego de dar muerte a la víctima, y depositar el cuerpo en la tina del baño principal, el acusado en ese momento comienza a registrar las dependencias del domicilio para sustraer especies, por lo que el homicidio no se comete



mientras se realizaba el acto apropiatorio ni tampoco una vez consumado este para asegurar su impunidad, sino que fue antes de iniciar la apropiación de especies, por lo que los sentenciadores equivocadamente entienden que la muerte de produjo con ocasión del robo.

Asevera que el fundamento duodécimo del veredicto es del todo errado, por cuanto la doctrina estudiada señala de manera clara que si el homicidio es previo a la apropiación de especies entonces estaríamos bajo la figura del homicidio con motivo del robo, por cuanto quiere decir que hubo un designio previo del sujeto por el homicidio como un medio para lograr el robo, designio previo que el tribunal no tuvo por acreditado en el núcleo fáctico, por cuanto el encuentro entre imputado y víctima fue casual.

De este modo, el tribunal para descartar la propuesta presentada por la defensa, en cuanto a que estaríamos en presencia de un concurso entre homicidio simple y hurto simple, señala que don Paredes Hincapie al haber estado horas en el domicilio, buscando y apilando especies para sustraer y, no haberse dado a la fuga rápidamente con lo primero de valor que hubiere encontrado, ya no es homicidio simple. Esta parte entiende que es irrelevante la permanencia del sujeto en el lugar de los hechos para seleccionar especies con la finalidad de sustraer, sobre todo entendiendo que el acusado modificó el sitio del suceso, por cuanto tal como se tuvo por acreditado en los hechos, se trasladó el cuerpo de un lugar a otro y trató de ocultarlo, de manera que el tiempo de permanencia no necesariamente fue para apilar especies.

A su turno, afirma que el tribunal comete una nueva aplicación errónea del derecho por cuanto agrega un requisito no contemplado en el delito de hurto, por cuanto sostiene que la sustracción de especies debe ser fugaz, pero el artículo 432 del Código Penal nada señala al respecto: “El que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropia cosa mueble ajena usando de violencia o intimidación en las personas o de fuerza en las cosas, comete robo; si faltan la violencia, la intimidación y la fuerza, el delito se



califica de hurto.” De la sola lectura de la norma podemos establecer que para la concurrencia del delito de hurto debe haber una apropiación de cosa mueble ajena, sin la voluntad de su con dueño y con ánimo de lucro y que haya ausencia de violencia, intimidación o fuerza, lo que si acontece en este caso, por cuando la apropiación fue posterior al acto homicida, acto homicida que se dio luego de una interacción social y sexual, no en una dinámica apropiatoria, por lo tanto el tribunal equivocadamente descarta la propuesta de la defensa, dado que la rapidez de la apropiación y la fuga del individuo no es un requisito contemplado por el legislador en el delito de hurto. Así podemos concluir que el tribunal yerra en sus argumentos jurídicos al momento de sostener su calificación jurídica, por cuanto al postular que el robo se comete con ocasión del delito, está señalando que el homicidio se cometió durante la apropiación de especies o después de esta, lo que no acontece en el caso, dado que fue antes de la acción apropiatoria, y que al justificar la inexistencia del delito hurto por haber el sujeto permanecido horas en el domicilio recopilando especies, agrega un requisito no contemplado por el legislador para ese tipo de delitos, por cuanto es irrelevante para el legislador el tiempo en que el sujeto se demore en sustraer una especie, de manera que también comete una errónea aplicación del derecho al momento de descartar la propuesta jurídica de la defensa.

En definitiva requiere se anule la sentencia dictada y el juicio oral que la precedió, y se dicte sin nueva audiencia -pero separadamente- la respectiva sentencia de reemplazo que se conformare a la ley, desestimando la calificación jurídica realizada por el tribunal y condene a su representado por los delitos de homicidio simple del artículo 391 N° 2 a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio y por el delito hurto simple del artículo 446 N° 2 a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de 1 UTM, en atención a lo señalado por el artículo 70, todos del Código Penal, o lo que en derecho corresponda, teniendo presente que le



beneficia a su mandante la circunstancia modificatoria del artículo 11 N° 9 del Código Punitivo y no le perjudica ninguna circunstancia agravante.

SEGUNDO: Que, sobre la base de lo expuesto en el basamento undécimo del fallo refutado, examinada la globalidad de los antecedentes probatorios pormenorizadamente analizados en la sentencia, los que fueron ponderados en la forma prevista por el legislador, esto es, en libertad, la unanimidad de las integrantes del Tribunal consideró que se logró establecer, en parte, la estructura típica de la figura jurídica propuesta en la acusación particular del querellante representante de la víctima indirecta doña Paulina Rosello Maturana, al ir las jurisdicentes de manera paulatina tomando conocimiento de cada una de las circunstancias en que fueron desarrollándose los sucesos hasta el desenlace final que culminó con la muerte de don Jorge Eduardo del Carmen Irarrázaval Alarcón; esto es, desde su encuentro con el acusado la tarde noche del día 06 de junio, hasta la salida de este último en horas tempranas de la mañana del 07 de junio del año 2019, -casi doce horas después- desde la escena del crimen, específicamente el lugar donde habitaba el señor Irarrázaval Alarcón, a saber, Avenida Raúl Labbé N° 12.490, Departamento 57, de la Comuna de Lo Barnechea, así como también, secuencialmente la conducta y actividades que desplegó detalle a detalle el inculpatado en sus aspectos más relevantes.

En efecto, el tribunal más allá de toda duda razonable, tuvo por acreditado “Que el 06 de junio de 2019, alrededor de las 18.00 horas, EDGAR DAVID PAREDES HINCAPIE concurrió hasta el domicilio de Jorge Eduardo del Carmen Irarrázaval Alarcón, ubicado en Avenida Raúl Labbé N° 12.490, Departamento 57 de la Comuna de Lo Barnechea, invitado por éste, para, luego de interactuar y compartir, incluso sexualmente, el primero procedió a sofocar al segundo, obstruyendo sus vías respiratorias y dándole diversos golpes, quedando Irarrázaval Alarcón impedido de oponer resistencia, luego procedió a propinarle seis heridas con un cuchillo, en el



costado derecho del flanco abdominal, amordazándolo con el cable de un cepillo eléctrico, para finalmente estrangularlo con su propio cinturón, con el que le rodeó el cuello, produciéndose su muerte alrededor de las 0.30 horas del día 07 del mismo mes y año, por la causa inmediata de ‘estrangulamiento a lazo’, y concomitante con los diversos traumatismos toraco abdominales correspondientes a las heridas corto punzantes, según lo determinado por el respectivo informe de autopsia del Servicio Médico Legal. A continuación PAREDES HINCAPIE depositó el cuerpo en la tina del baño principal, y hasta alrededor de las 07.00 horas de la mañana del mismo día 07, procedió a revisar las distintas dependencias del domicilio, apilando especies tanto en un sillón como en la mesa, para luego retirarse, portando, entre otras especies de la víctima, un violín marca Francesco Cervini con su respectiva funda, un teléfono celular marca Iphone, modelo 8, una mochila de color negro con un notebook en su interior, una caja transparente en cuyo interior guardó diversos artículos, además de llevarse consigo 25 municiones balísticas marca Win Luger, calibre 9 milímetros, entre otros bienes de propiedad del afectado, dándose a la fuga con todas ellas en un vehículo de transporte de la aplicación UBER, siendo incluso al día siguiente -8 de Junio de 2019- detenido bajo hipótesis de flagrancia en causa diversa, por mantener en su poder las citadas 25 municiones balísticas de las cuales se apoderó bajo las referidas circunstancias”.

TERCERO: Que, el enmarcado fáctico determinado precedentemente a juicio de las juzgadoras sentenciadoras constituye el delito de Robo con Homicidio en la persona de Jorge Eduardo del Carmen Irrázaval Alarcón, ya que la muerte tuvo lugar con ocasión de la sustracción de especies de propiedad del occiso, para efectos de facilitar y concretar la sustracción y favorecer su impunidad, conforme al artículo 433 N° 1 en relación con el artículo 432, ambos del Código Penal, cumpliéndose por tanto en este punto los presupuestos normativos establecidos por el legislador para la comisión



del tipo penal por la cual impetró, en parte, su acusación el Querellante Particular representante de la víctima indirecta doña Paulina Rosello Maturana.

CUARTO: Que, el fallo reclamado aporta tanto razonamientos internos como externos, lo suficientemente claros y concordantes, siendo la decisión de la causa la deducción lógica de lo valorado previamente por las sentenciadoras.

Así las cosas, los supuestos yerros de derecho advertidos por el recurrente, que se detallan en su arbitrio, constituyen apreciaciones personales legítimas de un interviniente que acusó con la convicción íntima de no existir mérito suficiente para condenar por el delito dado por configurado en la sentencia, no obstante, sus argumentos fácticos fueron desechados razonadamente en las motivaciones undécima y duodécima, razonamientos que, sobre la base de su estudio y análisis esta Corte comparte y hace suyos, desde que el laudo se basta a sí mismo para llegar a la condena por el injusto legalmente establecido, según se expone palmariamente en el basamento duodécimo del veredicto impugnado, por lo que se desestimaré la hipótesis de nulidad alegada en su vertiente fáctico jurídica.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 297, 373, letra b), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad deducido por el letrado señor CESAR BUSTAMANTE MONTERO, Defensor Penal Público, por el condenado EDGAR DAVID PAREDES HINCAPIE, contra la sentencia del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, de fecha 16 de junio del presente año, declarándose, por consiguiente, que ella **no es nula**.

Regístrese, comuníquese, sin perjuicio de su notificación por el estado diario.

Redacción del Ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez.



RUC N°1.900.613.425-7.

RIT N° 21-2022.

Penal N° 2909-2022.



Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Antonio Ulloa M., Ministra Suplente Ana Maria Osorio A. y Abogado Integrante Eduardo Jequier L. Santiago, ocho de agosto de dos mil veintidós.

En Santiago, a ocho de agosto de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>